ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Correspondencia.
- 4.- Acto protocolario de entrega de la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2023.
- 5.- Iniciativa que presentan las diputadas y el diputado integrantes del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley de Accesibilidad Universal para el Estado de Sonora.
- 6.- Iniciativa que presenta la diputada Lirio Anahí Del Castillo Salazar, integrante del Grupo Parlamento del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de proteger el libre ejercicio del periodismo en el Estado de Sonora.
- 7.- Posicionamiento que presenta la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en relación con el Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres.
- 8.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023.**

10 de octubre de 2023. Folio 4071.

Escrito del Presidente Municipal de Nogales, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo, razonamientos para que sean tomados en cuenta al momento del análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de los Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2024. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO.**

10 de octubre de 2023. Folio 4072.

Escrito de los Presidentes de Canaco, Coparmex, Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, Consejo Económico y Social de Navojoa, Canacinttra y de la Barra Sonorense de Abogados, del municipio de Navojoa, Sonora, con el que solicitan la aprobación de un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, con el objeto de informar a este Poder Legislativo, en primer término, cuáles son las razones por las cuales, a los domiciliados ubicados en Navojoa, Sonora, no se les aplica la tarifa 1F; en segundo lugar, si resulta válido iniciar con la aplicación de dicha tarifa, estableciendo a partir de qué fecha. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.**

10 de octubre de 2023. Folio 4073.

Escrito del Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público del Municipio de Hermosillo, Sonora, con el que remite copia certificada de acta de sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público número 56 de fecha 09 de octubre de 2023, donde se autoriza la modificación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, en los rubros establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por este Poder Legislativo. **RECIBO Y SEMITE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y ASUNTOS MUNICIPALES.**

13 de octubre de 2023. Folio 4074.

Escrito del Presidente Municipal de Ures, Sonora, con el que solicita a este Poder Legislativo, su apoyo financiero, toda vez que no cuenta con la solvencia presupuestal para poder dar cumplimiento a la situación legal en la que actualmente se encuentra, derivado del expediente

laboral número 546/2019, que se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE CONTESTARÁ LO CONDUCENTE.**

13 de octubre de 2023. Folio 4075.

Escrito del Coordinador General del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública del Municipio de Hermosillo, Sonora, con el que remite acuerdo de la Junta de Gobierno, donde se autoriza la modificación y ampliación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, en los rubros establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que fue aprobado por este Poder Legislativo. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y ASUNTOS MUNICIPALES.**

HERMOSILLO, SONORA A 17 DE OCTUBRE DEL 2023.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Diputadas y el Diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL ESTADO DE SONORA**, lo anterior sustentado en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación física, mental, intelectual o sensorial, ya sea de forma permanente o temporal, para realizar sus actividades cotidianas y que al interactuar con su entorno social encuentran barreras que pueden impedir el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, por lo que diariamente se encuentran frente a la discriminación, la estigmatización y otras barreras que les impiden participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, experimentan formas comunes de desigualdades, como un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral.

El 2 de mayo del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.¹ Este tratado internacional tiene como objetivo proteger los derechos de las personas con discapacidad:

“**Artículo 1.** Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”

La ratificación de la Convención significó la obligación para el Estado mexicano de adecuar sus leyes al marco internacional, como así lo establece el artículo 133 de la Constitución Mexicana.

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008

Es así como desde 2008 se comenzaron a realizar acciones para integrar los derechos de las personas de discapacidad en el marco del derecho interno, por lo que cada vez es mayor la conciencia mundial sobre el desarrollo inclusivo, promoviendo así la plena integración de este grupo en la sociedad, por ello esto refiere específicamente a la importancia del desarrollo internacional en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discriminación bajo pretexto de discapacidad es “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de “ajustes razonables”.

En esta misma convención se reconoce a la “accesibilidad” en doble sentido normativo, lo reconoce como un “principio” y también como un “derecho”. Este concepto como principio significa que opera como una guía conductora, orientadora y mecanismo en la ejecución de las acciones para hacer efectiva la garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención y en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que viene consagrado en el artículo 1º donde prohíbe la discriminación por la condición de discapacidad de las personas.

Los principios en las leyes constituyen el eje rector que delinea la actuación del Estado, marcan los fundamentos que orientan las políticas públicas y establecen la perspectiva orientadora para el cumplimiento de obligaciones de todas las autoridades, el principio de accesibilidad no se trata únicamente de un derecho, sino de un pilar en la estructura que rige a nuestro Estado.

Ahora bien, la “accesibilidad como derecho” tiene un impacto directo en la mayoría de los bienes y servicios necesarios para el acceso a los derechos humanos, tales como la movilidad, la información, las comunicaciones y la vivienda. Por ello es importante que se incorpore el derecho a la accesibilidad en nuestro Estado, que promueva y garantice la mayor accesibilidad posible en la construcción de las políticas públicas y privadas destinadas al acceso de los derechos de la población.

El ejercicio del derecho a la accesibilidad permite a su vez el acceso a otros derechos fundamentales para el bienestar psicológico, físico y social, por lo cual los campos de aplicación de la accesibilidad son:

- a) Espacios urbanos y edificios, tanto los existentes como los nuevos: calles, parques, edificios.
- b) Los equipamientos, instalaciones, tales como las sanitarias, los sistemas de información y comunicación, etc.

En este orden de ideas es fundamental atender el principio de accesibilidad, para regir las decisiones del Estado en materia de derechos humanos de tal forma que garanticen que todas las personas deban gozar de los derechos sin distinciones derivadas de su condición humana, al igual que no debe existir preferencia o jerarquización alguna que privilegie un derecho sobre otros, y para que se realicen acciones que promuevan el acceso de un conjunto de derechos humanos consagrado en la Ley.

En los últimos años hubo una importante evolución en relación con la mirada sobre el colectivo de las personas con discapacidad, ya que, progresivamente, se deja de considerar la discapacidad como una enfermedad y se adopta la perspectiva de los derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objetos de protección, por lo cual debemos implementar en todos los rubros la mejor adaptación posible y suficiente para el pleno ejercicio de sus derechos.

Según la Organización mundial de la salud calcula que hay 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren actualmente una discapacidad importante. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de las enfermedades no transmisibles y a la mayor duración de la vida de las personas. Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación, el empleo, y las barreras que encuentran en el propio sistema de salud. 2

Así mismo, en México, de acuerdo con el INEGI, según el censo 2020, en la actualidad 20 millones, 838 mil 108 personas tienen alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental. Éstas representan 16.5 % de la población. De igual forma, de acuerdo con la misma información, 13 millones 934 mil, son personas con alguna limitación, 6 millones 179 mil 890 (4.9 por ciento) son personas con discapacidad y 1 millón 590 mil 583 (1.3 por ciento) tiene algún problema o condición mental. 3

En el mismo sentido, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) la población con alguna discapacidad presenta grandes problemas para poder acceder a sus derechos, a la par que, en su gran mayoría, se encuentra en situación de pobreza. Es así, el 48.6 % de las personas con alguna discapacidad se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 9.8 % en pobreza extrema. 4

Es por ello que Sonora está obligado a tomar medidas para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación ya que de acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2020 (DIF)², se estima lo siguiente: Hay una población de alrededor de 45 mil 945 personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, de los cuales 26 mil 980 hombres y 18 mil 965 son mujeres.

2 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health#:~:text=Se%20calcula%20que%201300%20millones%20de%20personas%2C%20es%20decir%2C%20el,la%20vida%20de%20las%20personas.>

3 Inegi. <https://www.inegi.org.mx/>

4 Coneval. <https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/>

Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran los entornos físicos y el transporte inaccesibles, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, los medios de comunicación no adaptados, las deficiencias en la prestación de servicios, y los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad y la falta de empatía de los diseños universales de los edificios y los espacios públicos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene siete metas referidas explícitamente a las personas con discapacidad y otras seis que se focalizan en las personas en situaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, por lo que todo México deberá someterse a ser más consciente con este tema y hacer todo lo posible por combatir todas las barreras sociales.

Se deben promover acciones para la eliminación de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad, tendientes a valorizar su subjetividad y fomentar la remoción de barreras y obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva.

Por lo cual los ajustes razonables son “las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas y suficientemente cómodas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Una sociedad debe de garantizar que las necesidades vitales básicas de todos sus integrantes estén satisfechas para poder ser una sociedad basada en la dignidad humana, la libertad y la igualdad, por lo que, la accesibilidad universal no sólo incluye a personas en situación de discapacidad, ya que en un momento determinado, cualquier persona puede verse perjudicada por las características del entorno y objetos, que nos limitan hacer nuestras actividades diarias.

Por lo que es urgente esta iniciativa, para que en Sonora se debe eliminar la discriminación, debemos crear todas las adaptaciones necesarias para que los edificios y los establecimientos públicos como privados cumplan con lo necesario para que ningún ciudadano se quede sin ejercer sus derechos, movilidad y pleno desarrollo, promoviendo así la igualdad de oportunidades, encontrando la manera de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del medio que nos rodea, de la manera más sencilla posible y sin ningún tipo de impedimento, donde la accesibilidad deba ser siempre sinónimo de calidad y seguridad, siendo así esta ley de accesibilidad seguirá los principios rectores que definen el camino a seguir por las autoridades en todas sus decisiones y actuaciones cuando se trate de las personas con discapacidad, porque hará efectivo el acceso a sus derechos humanos.

Las Legislaciones vigentes aplicables, incluidas Leyes y Reglamentaciones, Normas Técnicas y demás referencias aplicables al Diseño Universal deben considerar a la

Accesibilidad como la Facilidad para desplazamientos, uso y goce de los Espacios Públicos y Privados con Acceso Público, Edificios Públicos y Transporte Público en el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 52 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto que en el Estado de Sonora, se garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad con el fin de obtener su plena inclusión social. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos legales a los que se encuentra sujeta la presente Ley.

Artículo 2.- Todas las edificaciones públicas y privadas, que presten servicios al público, que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada que se dispongan en la presente Ley, reglamentos, normas técnicas y demás ordenamientos aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones suficientes, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresiva.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en el Estado de Sonora, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo, tanto en zonas urbanas como rurales.

II. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias suficientemente holgadas y cómodas para garantizar a las personas con discapacidad y con movilidad limitada el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular.

III. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad o con movilidad limitada, para lograr una vida autónoma e integración.

IV. DIF SONORA: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el estado de Sonora.

V. Discriminación: Toda distinción exclusiva o restricción basada en una condición de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

VI. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado de manera que tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios: uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso.

VII. Estado de dependencia: El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que requieren de la atención de otra u otras personas para realizar las actividades esenciales de la vida, lo anterior por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, intelectual, psicosocial o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía.

VIII. Intersectorialidad: El principio en virtud del cual, las políticas en cualquier ámbito de la gestión pública deben considerar como elementos transversales, los derechos de las personas con discapacidad.

IX. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

X. Persona con movilidad limitada: Aquella persona que, de forma temporal o permanente debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna otra condición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.

Este concepto Incluye a niños, niñas y adultos que transitan con ellos o ellas, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, personas con equipaje o paquetes que impidan su adecuado traslado, así como a la persona que la acompaña en dicho desplazamiento.

XI. Ruta accesible: Es aquella que permite una circulación legible, continua y sin obstáculos o la menor cantidad posible de éstos; con la combinación de elementos construidos, accesorios y señalización que garantiza a las personas entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico, ya sea en edificaciones, espacio público o el transporte.

XII. Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de soporte, intermediación o cuidado, requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, así como para superar barreras de movilidad o comunicación; todo ello en condiciones de mayor autonomía funcional.

XIII. Vida Independiente: La condición que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad en ejercicio del derecho al libre desarrollo de su personalidad.

CAPÍTULO II. DE LA COMPETENCIAS

Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a:

- I. El Titular del Ejecutivo del Estado;
- II. El DIF Sonora;
- III. La fiscalía general de Justicia Del Estado De Sonora;
- IV. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
- V. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora;
- VI. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora;
- VII. Instituto de Movilidad y transporte del Estado de Sonora;
- VIII. Coordinación Estatal De Protección Civil;
- IX. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora;
- X. La Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora;
- XI. La Secretaria de Turismo del Estado de Sonora; y
- XII. Los Ayuntamientos.

En la aplicación y cumplimiento de la presente Ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, diseño universal e intersectorialidad.

Artículo 5.- El Titular del Ejecutivo del Estado ejercerá las funciones de vigilancia e inspección de la presente Ley, debiendo para ello expedir los reglamentos, decretos y acuerdos que correspondan y sean necesarios en el ámbito de su competencia. Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades:

- I. Implementar programas y acciones que permitan garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en el Estado de Sonora;
- II. Incorporar en caso de ser necesario, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora, los recursos financieros, que permitan ejecutar los programas y acciones tendientes a asegurar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en el Estado de Sonora; y
- III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 6.- Son atribuciones del DIF SONORA:

I. Promover el Derecho a la Accesibilidad y la movilidad, a través de programas acciones y proyectos que de manera directa o conjuntamente se ejecuten con instancias gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la academia, con el objeto de que impulsen y fomenten la participación inclusiva de las personas con discapacidad, de sus familias y éstos en sus comunidades en el Estado de Sonora.

II. Impartir cursos de capacitación y actualización en materia de accesibilidad, al personal de las áreas competentes de las instancias gubernamentales encargadas de registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones; así como a la academia, sociedad civil e iniciativa privada; y

III. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora:

I. Elaborar conjuntamente con el DIF Sonora, los programas orientados a la sensibilización sobre el derecho a la accesibilidad para todas las personas que viven o transitan en el Estado de Sonora, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en la materia;

II. Difundir en conjunto con el DIF Sonora, las acciones, políticas y campañas de sensibilización que permitan generar una toma de conciencia entre las y los ciudadanos que habitan y transitan en el Estado de Sonora sobre la trascendencia de la accesibilidad para todas y todos sus habitantes; y

III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora:

I. En materia de recuperación del espacio público, aplicar los criterios de accesibilidad establecidos en el Reglamento de Construcciones para el Estado de Sonora y sus normas técnicas complementarias, las normas de construcción de la Administración Pública local, así como los manuales y guías técnicas vigentes en la materia;

II. Coadyuvar con las Delegaciones en el mejoramiento de la movilidad, bajo los principios del diseño universal, con los ajustes razonables que se requieran de manera progresiva; y

III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9. En el marco de sus respectivas atribuciones, las autoridades estatales y municipales emitirán lineamientos para garantizar la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad o con movilidad limitada, en la infraestructura pública o privada, equipamiento urbano y espacios públicos.

Artículo 10. Los gobiernos municipales contemplarán en sus programas de obra pública y desarrollo urbano, las facilidades urbanísticas y arquitectónicas de tránsito, libre acceso,

desplazamiento, uso seguro y señalización, acorde a las necesidades de las personas con discapacidad y movilidad limitada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

Artículo 11. Los Ayuntamientos emitirán las normas técnicas complementarias en las que se determinarán los requisitos y lineamientos a que deberán sujetarse las construcciones y remodelaciones que se lleven a cabo en el municipio, para incorporar facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, con el fin de brindar y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, considerando los lineamientos generales establecidos por la Secretaría de Infraestructura y desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

CAPÍTULO III. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES

Artículo 12.- Con la finalidad de promover las necesidades de las personas con discapacidad y el derecho a participar en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas, se realizarán campañas y acciones de sensibilización en materia de accesibilidad y diseño universal en el entorno físico, incluyendo todas las edificaciones, espacios públicos, transporte público de pasajeros, la información y las comunicaciones. También deberán tomarse en consideración las necesidades de las personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica.

DIF Sonora en colaboración con los entes de gobierno del Estado de Sonora, darán promoción a las campañas y acciones de sensibilización mediante foros, talleres, exposiciones, cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 13.- Todo los municipios del estado de Sonora, las edificaciones públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando también a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica.

En el caso de construcciones existentes y previo dictamen, se harán los ajustes razonables y adaptaciones necesarias de manera progresiva sin alterar la configuración esencial de la edificación, bajo criterios de accesibilidad y conforme a los preceptos que al respecto establezca la presente Ley y su reglamento, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y demás disposiciones contenidas en otros ordenamientos legales estatales o municipales vigentes.

Artículo 14.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, ajustándose a los principios de diseño universal y la aplicación de los ajustes razonables necesarios de manera progresiva, con la finalidad de que todas las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y seguridad, de conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos vigentes en la materia.

Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para su utilización en la vía pública y se identificarán y ajustarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones y ordenamientos legales aplicables, incluyendo que las nuevas construcciones de andadores, plazas, banquetas, rutas públicas deberán considerar la implementación de guía de líneas podo táctiles de acuerdo a las normas aplicables.

Artículo 15.- Los edificios donde las autoridades estatales y municipales brinden sus servicios, deben garantizar que las personas con discapacidad o con movilidad limitada puedan desplazarse mediante una ruta accesible para utilizar todos los servicios que se ofrecen.

Los espacios de uso público o privados de uso público, en medida de lo posible y de conformidad con la disponibilidad presupuestal deberán contar, por lo menos, con los siguientes ajustes razonables:

- a) Rampas o elevadores en escaleras y desniveles;
- b) Escalón universal, fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores,
- c) anaqueles, sanitarios, elevadores y desniveles.
- d) Alarmas y anuncios o turnos en sistemas sonoros y visuales;
- e) Avisos de privacidad, reglamentos, términos, condiciones y toda información legal o relevante en formatos accesibles, como lo son Lengua de Señas Mexicana, sistema de escritura braille y formatos de lectura fácil, y;
- f) Ventanillas y mostradores adecuados para usuarios que utilicen silla de ruedas.
- g) Línea Guía Podo Táctil privilegiando los inicios y destinos en banquetas, andadores, escaleras, plazas, zonas de transición, descansos y todos aquellos espacios de circulación.

Artículo 16.- Todas las edificaciones públicas y de uso al público deberán mostrar a las y los usuarios, de forma visible, el Símbolo Internacional de Accesibilidad, lo anterior con el objeto de informarles las condiciones de accesibilidad existentes, mismo que será utilizado con base en lo dispuesto por la normatividad aplicable para identificar como mínimo los siguientes elementos:

- I. Rutas accesibles;
- II. Puertas de entrada y salida;
- III. Sanitarios accesibles; y
- IV. Cajones de estacionamiento exclusivo o preferente.

Artículo 17.- Todas las edificaciones públicas y de uso público deberán mostrar, de forma visible, a las y los usuarios la señalización visual, táctil, tacto visual y auditiva, mismas que deberán utilizarse para identificar lugares específicos tales como:

- I. Directorios;
- II. Planos de localización;
- III. Sanitarios accesibles; y
- IV. Elevadores, escaleras o rampas de acceso e información general.

Lo anterior con el objeto de que las personas con discapacidad y con movilidad limitada puedan identificar los espacios destinados para ellas y el acceso a la información que requiera.

Artículo 18.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas accesibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y con movilidad limitada.

Artículo 19.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios financieros del Estado de Sonora, deberán contar con espacios accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, contemplando la tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, para este grupo de población.

Artículo 20.- En todo espacio público y privado del Estado de Sonora, principalmente en aquellos que se encuentren abiertos al público en general, se deberá permitir en todo momento el acceso de los perros guía que acompañen a las personas con discapacidad visual, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- I. Que el perro guía haya adquirido las aptitudes de adiestramiento precisas para llevar a cabo las funciones de acompañamiento, conducción y auxilio correspondientes. Para tal efecto, el organismo del gobierno del Estado encargado de las políticas públicas en materia de discapacidad, expedirá un distintivo oficial que el animal deberá portar permanentemente.
- II. Que la autoridad competente haya certificado que el animal cumple con las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.
- III. Utilizar al perro guía exclusivamente para las funciones específicas para las que fue adiestrado.
- IV. Cumplir con las normas de higiene y seguridad en vías y lugares públicos.

El personal de los centros de adiestramiento de perros guía tendrá los mismos derechos y obligaciones que se reconocen a las personas con discapacidad acompañadas por un perro guía, durante las fases de instrucción y seguimiento de éste. En el caso de estancia temporal de personas con discapacidad no residentes en el estado de Sonora, se validará la condición de sus perros guía mediante el distintivo concedido por la entidad federativa correspondiente.

Las personas con discapacidad que vayan acompañadas por un perro guía en vehículos de autotransporte público, el animal deberá ir preferentemente en la parte trasera del vehículo o a los pies de la persona con discapacidad. En su caso, también podrá ocupar uno de los lugares autorizados para personas con discapacidad.

Artículo 21.- Cuando se realice una reforma parcial o total de áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, deberán construirse de forma accesible conforme a las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.

Artículo 22.- Los vehículos de transporte público deberán tener piso no deslizante, y sus accesos deberán permitir que la bajada o subida de las personas con discapacidad o movilidad limitada, se realice de forma cómoda y autónoma. Los medios mecánicos incorporados a los vehículos para facilitar el acceso y el descenso de los viajeros deberán estar autorizados por el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, y el conductor de dichos vehículos será el responsable de la manipulación de los equipos instalados.

El interior de los vehículos contará con el espacio físico suficiente para que las ayudas técnicas sean utilizadas apropiadamente. Además, deberán contar con sistemas de megafonía y paneles luminosos para que los pasajeros adviertan con suficiente anticipación, la llegada a las paradas.

Artículo 23.- Los autobuses urbanos deberán contar al menos con dos lugares reservados para personas con discapacidad adecuadamente señalizados, que estén cercanos a las puertas del vehículo y deberán tener un timbre de aviso de paradas.

Artículo 24.- En los municipios que cuenten con servicio de taxi, al menos uno deberá contar con ayudas técnicas para que sea utilizado por personas con discapacidad o movilidad limitada.

Artículo 25.- La colocación de semáforos u otros instrumentos de señalización vial, se efectuará de manera estratégica a efecto de que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas, o el de un instrumento de apoyo para personas con discapacidad visual.

CAPÍTULO IV. DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ESTADO DE SONORA.

Artículo 26.- Con el propósito de garantizar el derecho a la accesibilidad universal al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, DIF Sonora en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, certificarán en materia de accesibilidad, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición del Certificado de Accesibilidad del Estado de Sonora.

Dicho certificado garantizará la accesibilidad del Estado de Sonora, de todo espacio construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte público de pasajeros que preste servicios en ella.

Artículo 27.- Para la expedición del certificado de accesibilidad, el organismo del gobierno del Estado encargado de las políticas públicas en materia de discapacidad deberá cumplir con lo siguiente:

I. Elaborar, actualizar y publicar un Estudio de Evaluación de Accesibilidad, que deberá regir, orientar y aplicarse por ambas instancias, al momento de efectuar los trabajos de evaluación al espacio construido e infraestructura de transporte, para lo cual podrán convocar a las instancias de los sectores público, privado y social competentes o expertas en la materia;

II. Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad física, entorno urbano, en la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los entes públicos y privados, respecto a las condiciones necesarias de accesibilidad, en el marco de la seguridad, el diseño universal y el libre tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como en la accesibilidad a la información, las comunicaciones y el transporte público de pasajeros, gubernamental o concesionado; y

III. Realizar un Censo que contenga a las instituciones y entes que obtengan el Certificado de Accesibilidad del Estado de Sonora, mismo que deberá ser publicado y actualizado de conformidad a lo que establezca el reglamento que será elaborado para la presente Ley.

IV. Las demás que señale el reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO V. DE LAS SANCIONES

Artículo 28.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley por parte de particulares, será sancionado por las autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 29.- En caso de incumplimiento de los preceptos de esta Ley por parte de funcionarios de la administración pública estatal o municipal, serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonoras y de los Municipios vigente, y demás ordenamientos legales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el estado de Sonora, deberán elaborar y expedir dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento de la presente Ley.

A T E N T A M E N T E

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS
DIGNA PARA TODOS”**

**LAS DIPUTADAS Y DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXIII
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,**

DIPUTADA ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA

DIPUTADA MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES

DIPUTADO JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

Hermosillo, Sonora, a 17 de octubre de 2023.

**H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
P R E S E N T E.-**

La suscrita, Diputada Local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ante esta H. Soberanía comparezco para presentar Iniciativa con proyecto de **DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO EN EL ESTADO DE SONORA**; al establecer un marco jurídico que enfatice la importancia del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, y sancione más severamente a quienes pretendan atentar o atenten contra quienes ejercen la profesión del periodismo, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El libre ejercicio del periodismo constituye un elemento fundamental para el robustecimiento y cabal ejercicio de las instituciones democráticas que justifican nuestra forma de gobierno. La libertad de expresión, el derecho a conocer la verdad y la libertad de prensa, son pilares fundamentales para contar con una sociedad informada y atenta tanto del acontecer local, nacional y global, como del ejercicio gubernamental.

En reconocimiento de la importancia y trascendencia de estos derechos y libertades, la Constitución Mexicana establece en su artículo 6° que *“la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; ... Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así*

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

Asimismo, el Artículo 7° del mismo ordenamiento constitucional, dispone que *“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones... Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”*

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció en su Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la existencia de libertad de expresión, y que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

En ese marco, reconoce como principios de este derecho, entre otros, los siguientes:

“1.- La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2.- Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben

contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

6.- Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

8.- El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Si bien desde el año 2018 en México y desde el 2021 en Sonora se ha trabajado por una auténtica transformación tanto de la vida pública como de la sociedad mexicana, aún existen en nuestro país grupos fácticos de poder con intereses contrarios a la divulgación de la verdad, que lamentablemente buscan coartar el ejercicio de los derechos fundamentales apenas citados, por lo que el ejercicio profesional del periodismo puede verse afectado.

Y si bien existen y han existido acciones de gubernamentales contra la ola de violencia para la protección de periodistas, como con la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objeto es el fijar las bases para la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en

situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, estimamos que es menester impulsar acciones para fortalecer el marco de protección de quienes realizan tan importante función social.

Por ello, en el marco de nuestra competencia constitucional, estimo indispensable que el Congreso del Estado colabore con las políticas de seguridad pública implementadas por el actual Gobierno del Estado para la protección de libre ejercicio del periodismo en Sonora, con el propósito de robustecer el marco normativo para una más efectiva procuración de justicia que a su vez busque disuadir cualquier agresión que pretenda atentar contra quienes ejercen la profesión del periodismo en nuestra entidad.

La presente iniciativa, pretende así reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con los siguientes propósitos:

En primer término, se propone agravar aquellas conductas enfocadas a pretender intimidar o amenazar a quienes ejercen el periodismo en cualquiera de sus manifestaciones, tanto por parte de cualquier persona como de quienes ejercen autoridad legal, ello al señalar sanciones más severas a quienes cometan los delitos de amenazas y de abuso de autoridad en perjuicio de periodistas en ejercicio de su profesión o como consecuencia del mismo, precisando expresamente los casos y las excepciones que se deberán hacer por parte de la autoridad para impedir conductas que constituyan o puedan constituir delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas. Igualmente se propone incluir dentro del catálogo de conductas reconocidas como lesiones u homicidios calificados, a aquellas conductas que se realicen en contra de quienes ejercen el periodismo durante su ejercicio profesional o como consecuencia del mismo.

Todo ello al estimar que en los casos referidos, además de tratarse de delitos que atentan contra la paz, seguridad, integridad y vida de las personas, como aspectos indispensable para el correcto ejercicio y goce de cualquier derecho humano, también constituyen, atentados en contra del libre ejercicio de los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y del derecho de cualquier persona estar informado y conocer la verdad.

Adicionalmente, estimo que el aumento de la penalidad propuesta, así como la clasificación de los delitos de lesiones y homicidio como ‘calificados’, tendrá como consecuencia una mayor severidad en las sanciones que serán aplicadas a quienes incurran en tales conductas –con penas que para el delito de lesiones aumentarán las sanciones en dos terceras partes de la pena que ordinariamente recibiría la conducta, y penas para el delito de homicidio que podrán ascender de veinte a cincuenta años de prisión–, tanto si dichas conductas se llegasen a consumir como si sólo se realizaran en grado de tentativa –con la correspondiente reducción de la sanción que deba aplicarse por tratarse de tentativa–, reconociendo así la trascendencia tanto humana como social de cualquier conducta que atente contra la integridad o vida de quienes ejercen el periodismo en Sonora.

Por otro lado, la reforma también tiene como pretensión el incluir en la normativa penal, la definición y alcances del término “periodistas” con el fin de otorgar certeza y seguridad a toda persona que directa o indirectamente realice o colabore con las funciones de periodismo, ya sea mediante la investigación informativa, la sintetización de la misma, la redacción, jerarquización, edición, fotografía, videograbación, divulgación, publicación o difusión de información, noticias, ideas u opiniones para el conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, y ya sea que la misma se realice de manera habitual o esporádica, de forma remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral formal con algún medio de comunicación.

La pretensión de esa definición es el procurar clarificar y reconocer todas las actividades que inciden, directa o indirectamente, en el ejercicio periodístico, con el propósito de buscar ampliar el marco de aplicación de la norma penal a la mayor cantidad posible de personas relacionadas con esa actividad.

Por último, la iniciativa también propone establecer que en aquellos delitos de amenazas y de abuso de autoridad que pretendan coartar la libertad de expresión, en los términos propuestos, la persecución e investigación de los mismos deba ser realizada oficiosamente por parte de la autoridad ministerial –sin perjuicio de que en el caso de

homicidio y lesiones calificados, el Código Penal ya establece los supuestos para la investigación oficiosa de esas conductas–, con el fin de enfatizar el compromiso de las instituciones públicas del Estado de Sonora por buscar prevenir, sancionar y erradicar cualquier conducta que busque atentar contra estos derechos fundamentales para la democracia.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se **reforma** el segundo párrafo del artículo 259 y se **adicionan** una fracción I Bis y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 180, un tercer párrafo al artículo 238 y un tercer párrafo al artículo 259, todos del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 180.- ...

I.- ...

I BIS.- Cuando indebidamente emplee la fuerza pública para impedir el libre ejercicio del periodismo o con motivo de ello, salvo en los casos en que la conducta impedida o que motive el empleo de la fuerza pública, pueda constituir o constituya un delito contra el desarrollo y dignidad de las personas, en los términos previstos en este Código. En este caso, las sanciones a que se refiere este artículo se aumentarán en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, y el delito será perseguido de oficio;

II.- ...

Cuando la conducta sea realizada en perjuicio de un periodista en ejercicio de sus actividades de periodismo o como consecuencia del desempeño de su actividad o profesión periodística, las sanciones a que se refiere este artículo se aumentará en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, y el delito será perseguido de oficio;

III a la XVI.- ...

ARTICULO 238.- ...

I a la II.- ...

...

Si la víctima fuera algún o alguna periodista en ejercicio de sus actividades de periodismo o como consecuencia del desempeño de su actividad o profesión periodística, se aumentarán las penas que correspondan hasta en la mitad en su mínimo y en su máximo, y el delito será perseguido de oficio.

ARTICULO 259.- ...

Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio, cuando se cometan por inundación, incendio, gases o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra substancia nociva a la salud; por contagio doloso de una enfermedad venérea o de algún otro mal grave y fácilmente transmisible; por retribución dada o prometida; por tormento; por motivos depravados o por brutal ferocidad; o cuando sean cometidos en contra de periodistas en ejercicio de sus actividades de periodismo o como consecuencia del desempeño de su actividad o profesión periodística.

Para los efectos de este Código, se consideran periodistas aquellas personas que laboren o tengan como actividad profesional, el buscar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, fotografiar, videgrabar, divulgar, publicar o difundir información, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación impreso, radioeléctrico, digital, electrónico o imagen. Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio de comunicación.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Atentamente,

Dip. Lirio Anahí Del Castillo Salazar

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.